



Gastón von Mühlenbrock Zamora
Diputado por Los Ríos

Licencias Médicas

Resulta absolutamente repudiable el informe evacuado por Contraloría, que constata que más de 25 mil funcionarios públicos, pese a encontrarse con licencia médica, salieron del país, cuando debieron haber guardado reposo por razones médicas.

Por eso, aquí no puede haber dobles lecturas y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debe querrellarse contra estos “servidores” públicos, mientras que Contraloría debe iniciar los sumarios correspondientes y se identifique a los responsables, para que esos recursos de todos los chilenos, sean restituidos.

La información fue revelada por la propia Contraloría, tras un cruce de datos entre la PDI, las bases de datos de funcionarios públicos, y los registros de licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024. El estudio detectó más de 35.585 licencias presuntamente irregulares, con un promedio de reposo de 17,7 días. Un 69% de ellas corresponde a usuarios de Fonasa y un 31% a Isapres.

Resulta inaceptable la falta de control en los organismos públicos. Estamos hablando de 25 mil personas que utilizaron licencias médicas para salir del país, muchas veces con pleno conocimiento de sus jefaturas. Esta es plata de todos los chilenos. El 60%

de estas licencias las financia Fonasa, con fondos que deberían destinarse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos para personas en listas de espera. Esto es un fraude al Estado y debe tener consecuencias civiles y penales. No podemos seguir financiando vacaciones con recursos públicos.

Sin duda, aquí hay un abuso grosero. Se trata de funcionarios públicos que, usando licencias presumiblemente fraudulentas, viajaron fuera del país. Es un robo a los recursos de todos los chilenos, y además daña profundamente la fe pública. Pero también hay que investigar a quienes emitieron esas licencias médicas. No puede haber impunidad.

Estamos ante un uso indebido de un instrumento público como son las licencias médicas, por parte de personas que deberían dar el ejemplo. Mientras tanto, hay chilenos realmente enfermos que no tienen acceso a licencias, o deben esperar meses para que se las paguen. Aquí no puede haber tolerancia. Los responsables deben asumir las consecuencias y devolver los recursos mal utilizados.

Este abuso sólo viene a sumarse al desprestigio que tienen los funcionarios públicos ante la ciudadanía.